

# INFOESTRATEGIA

Boletín legal

No. 5, Septiembre de 2007

Newsletter

CRA.11 No.84-42, Int.9  
PBX: (57-1) 5300936  
Tels: (57-1) 2369561/  
5310652 / 5300936  
Fax: (571) 5300958



Bogotá D.C. - Colombia

## MEMBRESIAS / MEMBERSHIPS

INTA – International Trademark Association  
ASIPI – Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial  
ACPI – Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual  
IDLO – International Development Law Organization  
CECOLDA – Centro Colombiano del Derecho de Autor  
EALAP – Effective Alliance Against Piracy  
IACC – International Anticounterfeiting Coalition

### Aprobada Ley que Reforma la Contratación con el Estado

Después de dos años de debates en el Congreso, finalmente se aprobó la Ley 1150 de 2007, mediante la cual se introducen medidas tendientes a lograr en lo sucesivo una mayor eficiencia y transparencia en el régimen de contratación estatal, modificando por lo tanto el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993). La nueva ley esta pensada para hacer mas limpia y expedita la contratación estatal, reduciendo las posibilidades de contratación directa y la inclusión de procedimientos que no requieren tanto trámite, pues estudios y la práctica han demostrado que la Ley 80 contiene muchos tramites que encarecen y dilatan la contratación.

Estos son los aspectos más relevantes de esta ley:

En ella se estableció cuatro modalidades para escoger al contratista: La licitación pública, la selección abreviada, concurso de meritos y contratación directa.

La primera es la regla general de selección, siendo la excepción las otras tres modalidades. La segunda servirá para simplificar las adquisiciones o suministro de productos o servicios que tengan características técnicas uniformes o que sean de común utilización por parte de las

### Law reforming procedures for contracting with the nation is approved

After two years of debate in Congress, Law 1150 of 2007 was finally approved containing measures intended to achieve henceforth greater efficiency and transparency in the regime for government contracts and thus modifying the General Law of Contracting Procedures (Law 80 of 1993). The new law intends to make procedures for government contracts cleaner and more expedite, reducing the possibilities for direct contracting and containing less complicated procedures, considering that different studies and praxis itself have proven that Law 80 encompasses many procedures that make contracting with the government more expensive and dilated.

The following are the most relevant aspects of this law:

Four modalities were established for the selection of the government contractor: public bid, abbreviated selection, contest of merits, and direct contracting.

The first modality is the general rule for selection, while the other three are exceptions.

The second one would serve to simplify the acquisitions or provision of products or services which may share uniform technical characteristics or that may be of common use by

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 5, Septiembre de 2007

Newsletter

---

entidades públicas, siendo el objetivo, ahorrar costos administrativos y la obtención de un mejor precio final.

La tercera modalidad, aplica para los casos en los cuales la entidad estatal pretenda seleccionar consultores o proyectos, en ella se tendrán en cuenta criterios como la experiencia, la capacidad intelectual y de organización de los proponentes.

La cuarta, forma de seleccionar un contratista es a través de la contratación directa, la cual se aplicará principalmente en casos de urgencia manifiesta, para la contratación de empréstitos y para la celebración de contratos interadministrativos.

La nueva ley, asimismo determina que al momento de calificar una propuesta, ya no se tendrán en cuenta factores como la capacidad jurídica, la experiencia o los recursos financieros del proponente, simplemente gana quien presente la mejor oferta. Los factores de experiencia y capacidad pasan a ser requisitos para participar, no para ganar.

En la ley 1150, se establece que para elegir la modalidad de contratación no importa el monto del contrato sino la complejidad del objeto contractual, contrario a la Ley 80, en la cual se tiene en cuenta es la cuantía del contrato para determinar si se toma la vía de la licitación pública o la de la contratación directa.

Por ultimo, esta ley establece que el Estado tiene la facultad de cobrar directamente a los contratistas las multas por incumplimiento, sin necesidad de acudir a un proceso judicial. En este orden de ideas las entidades estatales podrán inclusive hacer efectivas las multas a través de compensaciones de lo adeudado al contratista o cobrarlas ellas misma por medio de su oficina de jurisdicción coactiva.

public entities, with the purpose of saving on administrative costs and obtaining a better end price.

The third modality applies to those cases in which the public entity intends to select consultants or projects. In this modality, criteria such as experience, intellectual capacity, and organization of the proponents will be taken into account.

The fourth way of selecting a contractor is through direct contracting, which will be applied mainly on cases of manifest urgency, for the contracting of loans, and for the celebration of inter-administrative contracts.

The new law also determines that factors such as juridical capacity, experience, or financial assets of the proponent will not be considered at the moment of rating a proposal: simply, the bid will be granted to whoever presents the best offer. The factors of experience and capacity will be requisites for participating in the bid, not for winning it.

Law 1150 establishes that in order to select the modality of the contract the amount of its value does not matter; instead, the complexity of the contractual object is considered. This is contrary to Law 80, according to which the amount of the contract is taken into account in order to determine if the selection is done by means of a public bid or through direct contracting.

Lastly, this law establishes that the government has the faculty of charging fines for non-compliance directly to the contractors without having to recur to a judicial procedure. In this line of thought, government entities may even make those fines effective through compensations of the debt from the contractor, or charge them themselves through their coactive jurisdiction office.

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 5, Septiembre de 2007

Newsletter

---

## La Prueba de Oficio en el Sistema Penal Acusatorio

A menos de seis meses para que el sistema penal acusatorio entre a regir en todo el territorio nacional, aun persisten interpretaciones propias del sistema inquisitivo o del mal llamado sistema mixto, que está a punto de ser desterrado de nuestro sistema penal.

Nos hemos percatado con algo de estupor en nuestro caso particular, pero no con sorpresa que algunos jueces de la República de oficio y por iniciativa propia, han ordenado la realización de pruebas dentro de un proceso penal, procediendo en contra del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal. En días pasados un juez dentro de una audiencia preparatoria ordenó la realización de unos dictámenes técnico-científicos en desarrollo de una investigación penal por delitos sexuales, y este no es un caso aislado, pues hemos visto otros ejemplos de esta situación en el diario acontecer judicial.

Hay una corriente en el país que considera que un juez para llegar a la verdad absoluta de los hechos y por su obligación de hacer prevalecer lo sustancial sobre lo formal podría eventualmente ordenar pruebas de oficio, ante la existencia de un vacío probatorio que pueda surgir en el desarrollo de la audiencia preparatoria o en el desarrollo del juicio oral. Incluso la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Casación Penal del 30 de Marzo de 2006<sup>[1]</sup>, señaló que por razones “de índole constitucional, el juez de la causa podría inaplicar la prohibición del Artículo 361<sup>[2]</sup>”.

## Evidence in the Penal Accusatory System

Less than six months before the Penal Accusatory System becomes enforceable across the nation, some interpretations pertaining to the inquisitive system -wrongly called mixed system and which is about to be outcast from our penal system- still persist.

We have noticed with stupor, however not surprisingly, that some office judges of the Republic have ordered on their own initiative that evidences be presented within a penal process, proceeding against article 361 of the Code of Penal Procedures. In past days, a judge ordered that some technical-scientific statements were to be presented within a preparatory hearing in the course of a penal investigation for sexual crimes. This is not an isolated case, for we have seen other examples of this same situation in daily judicial occurrences.

There is a trend in our country which sustains that in order to establish the absolute truth in all facts and considering a judge's obligation to make substance prevail over formalities, he or she could eventually demand evidences when facing the existence of a probatory vacuum that may arise in the course of a preparatory hearing or in oral judgment. The Supreme Court of Justice even indicates in its sentence of penal cassation of March 30, 2006<sup>[1]</sup>, that for reasons of “constitutional regards, the judge of the cause might not apply the prohibition stated in Article 361<sup>[2]</sup>”.

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 5, Septiembre de 2007

Newsletter

---

En nuestro criterio, esta posición conlleva un peligro que amenaza la estructura misma dogmático-filosófica del sistema penal acusatorio, la cual se cimienta en el esquema adversarial que enfrenta al Estado (representado por la Fiscalía General de la Nación) y a la defensa, para llegar por esa vía a la administración de justicia, esquema en el que el juez debe guardar absoluta imparcialidad para garantizar la igualdad y equilibrio a las partes.

En este orden de ideas, ordenar una prueba de oficio implica que el juez rompa ese equilibrio y afecte la igualdad de trato entre los sujetos procesales es decir “que con ese comportamiento se afecta la igualdad de armas<sup>[3]</sup>”.

Afortunadamente La Corte Constitucional mediante la sentencia C – 396 del Mayo 23 del año 2007<sup>[4]</sup>, declaró que el precitado artículo 361 era constitucional, y señaló con mucho acierto – *a nuestro criterio* - que en el esquema acusatorio la iniciativa probatoria, solo procede a petición de parte, y el juez solo esta facultado para decidir con base en las pruebas que las partes presentan a su consideración dentro del proceso penal. La prohibición del Artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, señala la Corte, “es una manifestación de la imparcialidad objetiva del juez. Esta separación de las funciones de instrucción y juzgamiento y la pasividad probatoria del juez favorece la igualdad de trato jurídico entre los sujetos procesales y en especial, lo que la doctrina ha denominado igualdad de armas”. Sin embargo, el Magistrado Marco Gerardo Monroy salvó el voto diciendo que la Constitución no excluye que de manera excepcional, se autorice al juez para decretar pruebas de oficio, para hacer prevalecer el valor de la justicia y lo sustancial sobre lo formal.

Queda entonces mas restringida la discusión frente al tema, y sobre todo le queda los sujetos procesales la herramienta

In our judgment, this position carries a risk that threatens the dogmatic-philosophical structure of the system itself, which is based on the adversarial scheme confronting the State (represented by the Attorney General) and the Defense, in order to reach the administration of justice through this way; in this scheme, the judge must maintain absolute impartiality with the purpose of guaranteeing equality and balance to the parts.

In this line of thought, requiring evidences implies that a judge break this balance, affecting the equality among the subjects of the procedures, that is “(that) with this behavior the ‘equality of arms’ is affected<sup>[3]</sup>.”

Fortunately, the Constitutional Court through sentence C–396 of May 23, 2007<sup>[4]</sup> declared that the aforementioned article 361 was fit to the Constitution, and indicated, very accurately, *in our judgment* – that in the scheme of the accusatory system, the probatory initiative only proceeds to the petition of one of the parts, and that the judge only has faculties to make decisions on the basis of the proofs that the parties present for his or her consideration within the penal process. The Court points out that the prohibition of article 361 of the Code of the Code of Penal Procedures “is a manifestation of the objective impartiality of the judge. This separation between the functions of instruction and judgment and the probatory passiveness of the judge favors the equality in the juridical treatment between the subjects of the procedures and especially regarding what the doctrine has denominated as ‘equality of arms’.” However, Magistrate Marco Gerardo Monroy saved his vote stating that the Constitution does not exclude that, in an exceptional way, a judge may be authorized to demand evidences in order to make the value of justice as well as substance over formality prevail.

The discussion over this matter is therefore more restricted, and above all, the jurisprudential constitutional tool remains in

---

# INFOESTRATEGIA

---

jurisprudencial constitucional para oponerse a que jueces tomen la iniciativa probatoria y se conviertan en factores desequilibrantes en el juicio oral, del cual ellos mismos van a ser quienes condenen o absuelvan.

[1] Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana Trujillo.

[2] El Artículo 361 del C. de P. Penal prohíbe textualmente que los jueces decreten pruebas de oficio.

[3] La doctrina ha denominado "IGUALDAD DE ARMAS" a la igualdad de al que deben gozar todos los sujetos procesales.

[4] Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY.

the hands of the subjects of the procedures, as opposing judges from taking the probatory initiative and thus become unbalancing factors in a judgment of which they will be part themselves by condemning or absolving.

[1] Proposing Magistrate: Dr. Edgar Lombana Trujillo.

[2] Article 361 from the Code of Penal Procedures textually forbids the judges to decree the need for evidences.

[3] The doctrine has called the equality which all the subjects of processes must enjoy "EQUALITY IN ARMS."

[4] Proposing Magistrate: Dr. MARCO GERARDO MONROY.

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 5, Septiembre de 2007

Newsletter

---

## Suspendida Norma que Exige Paz y salvo de la DIAN para Autorizar Importaciones

Recientemente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Literal i) del artículo 1º del decreto 1299 de 2006, que requiere un paz y salvo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – para autorizar importaciones de materias textiles, sus manufacturas y calzado y sus partes, clasificables en los capítulos 50 a 64 del Arancel de Aduanas. De acuerdo a lo señalado por la Sección Cuarta de este tribunal, el requerimiento de no tener deudas con la DIAN, está prohibido por una norma superior, como lo es el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 2150 de 1995, motivo por el cual procede la suspensión provisional de la exigencia del mencionado paz y salvo.

## Regulation demanding a certificate of discharge from the DIAN to authorize imports is suspended

Recently, the State Council provisionally suspended literal i) of article 1º of decree 1299 of 2006, requiring a certificate of discharge from the National Direction for Tax and Customs Administration, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) authorizing imports of textile materials and their manufactures, as well as shoes and their parts, classifiable in chapters 50 to 64 of the Customs Tariffs. According to what has been stated by the Fourth Section of this tribunal, the requirement of not having accounts pending with the DIAN is forbidden by a higher law, Article 15 of the legislative decree No. 2150 of 1995, and for this reason the provisional suspension of the aforementioned certificate of discharge proceeds.

---

# INFOESTRATEGIA

---

Boletín legal

No. 5, Septiembre de 2007

Newsletter

---

## Superintendencia de Industria y Comercio Reconoce Notoriedad de la Marca JUAN VALDEZ

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – a través de la Resolución No 028644 del 07 de septiembre de 2007, reconoció la notoriedad de la marca Juan Valdez, circunstancia mediante la cual esta marca obtiene una protección especial para evitar el riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario por parte de terceros.

El Superintendente de Industria y Comercio, expuso que la decisión se adoptó con base en diferentes razones encaminadas a probar porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. Así mismo, se tuvieron en cuenta diferentes juicios para determinar el status de marca notoria a través de la valoración de los niveles de difusión, conocimiento y recordación de la misma.

Igualmente, precisó que se está hablando de una marca que cuenta con una gran capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial, diferenciada y preferida con respecto a otras nuevas marcas de café.

La SIC dijo que las pruebas aportadas permitieron a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar que la marca Juan Valdez es un signo distintivo muy bien posicionado, de gran notoriedad, el cual goza de buen prestigio y excelente reputación en el mercado.

## Superintendence for Industry and Commerce acknowledges notoriety in the brand “JUAN VALDEZ”

The Superintendence for Industry and Commerce – SIC – through Resolution No. 028644 of September 07, 2007, recognized the notoriety of the brand Juan Valdez. Given this circumstance, this brand obtains a special protection to avoid the risk of confusion, association, dilution, and parasite use by third parties.

The Superintendent for Industry and Commerce declared that this decision was made based on different reasons intended to prove numerical percentages that will indicate the level of recognition of the sign, its participation in the market, the duration of its use, and the relevant presence of the brand in the media. Similarly, different judgments were considered in order to appoint the status of notorious brand through the evaluation of its levels of circulation, knowledge, and remembrance.

Similarly, he explained that this brand counts with a great distinctive capacity, since it is clearly related with its entrepreneurial origin, and has been differentiated and preferred among other new coffee brands.

The SIC stated that the proofs provided allowed the Superintendence for Industry and Commerce to determine that the brand Juan Valdez is a distinctive sign, very well positioned, and of great notoriety, which enjoys prestige and excellent goodwill in the market.